



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 068

Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **MARIA LUZ DARH PIEDRAHITA GRISALES contra LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y LA ARL COLMENA S.A.**

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 028 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por el ponente que se consigna enseguida:

Se afirma en la demanda que la actora inició labores con la sociedad acción en el año de 2003 hasta el año 2007, trabajando en misión para la sociedad Emtelco y desde el año 2007 a la actualidad fue vinculada directamente con la citada sociedad. Acorde con los reglamentos de la empresa Emtelco se le realizó exámenes médicos de ingreso, no encontrándose ningún problema de salud, ni de la voz; que fue contratada para labores de asesoría telefónica a clientes y en su actividad laboral el uso de la voz es casi continuo, es decir usa la voz en un 90% y el lugar donde realiza la actividad permanece con temperaturas bajas; que desde el mes de septiembre de 2009, empezó a tener problemas con su voz y el diagnóstico es el de disfonía y el concepto médico es que existía relación de causalidad, por lo que se dieron algunas recomendaciones médicas para ser reubicada, sin que el empleador las haya

acatado. Continuó contando que fue remitida a dictamen medico laboral para determinar el origen de la enfermedad, si era común o profesional, haciendo la calificación la Junta Regional, determinándose que la enfermedad disfonía crónica era de origen común, no conforme con la decisión interpuso los recursos de ley, siendo confirmado el origen de la enfermedad por la junta nacional, careciendo estas experticias de fundamentos científicos y técnicos para determinar la naturaleza de la patología.

Con base en los hechos expuestos solicita se declare la nulidad de los dictámenes Nos.45.657 emitido por la junta regional de calificación de Antioquia y nro. 43514405 de la junta nacional y como consecuencia, se declare que el origen de la enfermedad disfonía crónica que padece es de origen profesional.

La apoderada de **LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de: LEGALIDAD DE LA CALIFICACIÓN DADA POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, IMPROCEDENCIA DEL PETITUM: INEXISTENCIA DE PRUEBA IDÓNEA PARA CONVERTIR EL DICTAMEN- CARGA DE LA PRUEBA A CARGO DEL CONTRADICTOR, FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: INEXISTENCIA DE PRETENSIONES -COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL, BUENA FE DE LA PARTE DEMANDADA y la GENÉRICA.

Mediante auto del 23 de enero de 2017, se integró como litis consorte necesario por pasiva a la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de: INEXISTENCIA DE FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES.

También se integró a **LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.**, dando respuesta su apoderado, oponiéndose a las pretensiones y propuso como excepciones las de: INEXISTENCIA DE CAUSAL DE NULIDAD DEL DICTAMEN DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, AUSENCIA DE PROFESIONALIDAD DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD SUFRIDA POR LA

DEMANDANTE, FALTA DE TÍTULO Y CAUSA, PRESCRIPCIÓN, LA GENÉRICA O INNOMINADA.

EL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante sentencia, dejó sin efectos los dictámenes emitidos por las Junta Regional y Nacional de invalidez. Declaró que la patología de disfonía que sufre la demandante es de origen laboral. Costas a cargo de las accionadas.

IMPUGNACIÓN

Interpuso recurso de apelación el abogado de la ALR Colmena S.A., quien no comparte las valoraciones y apreciaciones hechas por el juzgado respecto del dictamen del Doctor Méndez, ya que existe suficiente evidencia de los vacíos y contradicciones en que ha incurrido y no tiene la entidad ni el mérito para desvirtuar las informaciones y afirmaciones de las conclusiones a las que llegaron tanto la junta nacional como la regional de calificación de invalidez y además de la EPS sura, quienes de manera uniforme señalaron que la patología de la demandante era de origen común. Existen en el acervo probatorio bastantes elementos probatorios que permiten señalar los dislates en que ha incurrido el dictamen pericial, puesto que se admite la existencia de una patología de base que origina todo el conflicto para posteriormente desnaturalizarlo en una consecuencia de origen laboral que sustancialmente no tiene la actora, además de que no existe información ocupacional objetiva respecto de las condiciones del puesto de trabajo y circunstancias de exposición en la actividad laboral de la demandante que tengan la capacidad y virtud de señalar que estaba expuesta a un factor de riesgo ocupacional que le genere la enfermedad; también indica el recurrente que se debe tener en cuenta que el perito no tiene los conocimientos de otorrinolaringología, ni estudios en el asunto de la voz, que permitan desvirtuar las calificaciones de médicos especialistas, que en toda la historia refieren que la patología de la actora es de origen común por una circunstancia de base previa a cualquier actividad laboral, razones suficientes para revocar la decisión del A quo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término oportuno anexó los alegatos el abogado de la demandante, quien manifestó que considera que el recurso de apelación de

la ARL Colmena, es un recurso dilatorio, ya que su representada, logro probar que la enfermedad que padece **DISFONIA CRONICA**, es de **ORIGEN PROFESIONAL**, teniendo en cuenta para ello varios exámenes, se analizó el sitio de trabajo, la actividad desempeñada, la exposición a los riesgos y demás, basta hacer un análisis del dictamen, el cual fue objeto de contradicción por parte de la ARL y no se dijo que el mismo podría ser errado o que no tuviera soportes científicos y más aún si analizamos el dictamen se puede concluir que el mismo fue rendido por persona idónea, que realizo los respectivos exámenes físicos e hizo un análisis detallado de todas las situaciones labores que incidieron en la salud de su representada, que llevo a la conclusión de que la ENFERMEDAD **DISFONIA CRONICA** es de **ORIGEN PROFESIONAL** y la calificación de la junta no se hizo conforme a derecho, razones más que suficientes para confirmar la sentencia .

Por su parte, el abogado de la ARL Colmena S.A., reitero lo expuesto en el recurso de apelación, manifestando su desacuerdo con el dictamen practicado en el trámite del proceso.

CONSIDERACIONES

La señora María Luz Piedrahita fue calificada por la Junta Regional de calificación de invalidez el día 13 de septiembre de 2013, emitiendo el dictamen No. 45657, indicando que la patología disfonía crónica (R490), es de origen común, pues al revisar la historia clínica y los antecedentes laborales, no se encuentra relación positiva entre el uso de la voz y los cuadros disfonicos (fls.8 a 10); inconforme con el dictamen interpuso los recursos de ley, manifestando que la junta regional hizo una errónea valoración, ya que antes de realizar la actividad que lleva desarrollando por varios años solo tuvo un episodio de disfonía que recibió el tratamiento adecuado. Acto seguido indica que lleva más de 10 años desempeñándose en el call center, sin ser cierto que desde el año 2010 fue reubicada y que solo da asesorías vía chat, sin utilizar su voz, pues si bien es cierto que fue trasladada a lo que se llama pasillo, sigue utilizando su voz, aunque no recibe llamadas, sigue dando respuestas a sus compañeros sobre las inquietudes de los usuarios. Y reitera que cuando ingresó a laborar le hicieron los exámenes de rigor y no se encontró que sufría de disfonía crónica, pues no se le hubiera contratado. Finaliza diciendo que cuando empezó a presentar los problemas de disfonía

crónica llevaba cerca de 6 años laborando, utilizando su voz de manera permanente por las 8 horas diarias. (fls.11 y 12). No se repuso la decisión por la junta regional, remitiendo a la actora a la Junta Nacional para surtir el recurso der apelación (fls.13), entidad que emitió el dictamen No. 43514405 del 9 de julio de 2014, confirmando que le patología de la actora era de origen común (fls. 15 a 17). Por último, encontramos a folios 140 a 152, el dictamen decretado de oficio por el despacho, rendido por la universidad CES, el cual determina que la enfermedad es de origen profesional.

El problema jurídico en esta instancia, atendiéndose al recurso interpuesto, se circunscribe a establecer si es dable declarar o no la nulidad de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez Regional y Nacional, y con ello tener como valido el decretado y emitido en primera instancia por la universidad Ces.

Sea lo primero indicar que la H. Corte Constitucional ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho de toda persona, el cual cobra gran importancia al constituirse en el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales, como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Ver Sentencia T-873 de 2013.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, sin que sea posible establecer diferencias en razón del origen profesional o común de los factores de incapacidad. Igualmente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino, también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

Dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral y que conforman los contenidos mínimos del derecho

fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellos: La valoración del estado de salud de la persona calificada, que debe ser completa e integral, pues las juntas están obligadas “a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente” (sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Ahora, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante, lo establecido en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, ya que es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar los errores en que pudo haber incurrido una pericia, por cualquier medio probatorio, atendiendo que, en los juicios laborales, conforme al artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo acreditar sus sustentos fácticos, por el medio que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Al solicitar la demandante un dictamen dentro del proceso, la juez de instancia, el 23 de enero de 2018, y a fin de determinar la patología de la actora y su origen, decretó la prueba solicitada, remitiéndola a la Universidad Ces, entidad que determinó el 15 de marzo de 2018, que la señora María Luz Piedrahita Grisales presenta patología **de Disfonía de origen laboral** con fecha de estructuración del 01/04/2014, la que corresponde a la fecha de la evaluación por el médico otorrinolaringólogo tratante, señalando que tiene un pronóstico incierto, ello con sujeción a lo establecido en el Decreto 1507 de 2014 (fls. 140 a 152).

Atendiendo el contenido de la experticia rendida por la universidad Ces, y dado que la contradicción de esta prueba se ajustó a los parámetros del artículo 228 del C. G. del P., pues nótese como a través de proveído del 4 de

abril de 2018 (fls. 159) el despacho de conocimiento corrió traslado del mismo por el término de 3 días, haciendo uso de este el apoderado de la COLMENA SEGUROS S.A., solicitando la competencia del perito de CENDES para sustentar la pericia, quien se presentó oportunamente a la audiencia citada y dio razón de la experticia.

Así las cosas, esta Sala, considera que tiene pleno valor probatorio el citado dictamen, en tanto, se fundamenta en una relación cronológica de eventos y de intervenciones de salud y sus consecuencias, las cuales a lo largo de los años van determinando la patología de la actora y desmejorando notablemente el estado de su voz; también efectuó el perito un test para determinar el daño de la voz, concluyendo que de acuerdo a la escala de valores, la patología era “severa”. Acto seguido explica el experto que la señora María Luz ingresó a la empresa como asesora comercial en el año 2007, pero con antecedentes de haber laborado en un call center desde el año 2003. Sus cuadros de disfonía se agravaron después de los 5 meses de su ingreso y fue reubicada en el año 2012, con mejoría de las incapacidades por su disfonía, pero no resolución completa de su cuadro y actualmente es evidente un nivel severo de disfonía, a pesar de que el uso de la voz ha disminuido en más del 70%. También indicó que para evaluar el posible origen laboral y establecer las consecuencias de la relación causal de acuerdo a la normatividad, era necesario establecer dos aspectos: 1) la existencia de un esfuerzo vocal constante y 2) la existencia de una patología de la voz.

Determinando que la ocupación puede ser la principal causa de la afectación vocal, cuando el uso excesivo de la voz esta asociado a ocupaciones que exigen un tiempo prolongado en el teléfono, cuyas condiciones ambientales están modificadas por el uso de aire acondicionado, el cual agrega un factor de riesgo de una menor humedad relativa, que en conjunto puede contribuir al trastorno y afectar el resultado del tratamiento. Concluye el perito que era clara la existencia de una patología adecuadamente diagnosticada; se trata de alteraciones de la voz del tipo de disfonía crónica de tipo funcional, que tiene como base un síndrome de tensión fonatoria, demostrada por los medios disponibles; además está demostrada la exposición prolongada a un trabajo con un alto esfuerzo vocal, asociado a esta patología de base, que hace que los hallazgos actuales, estén relacionados con un proceso morboso que demora

muchos años para su instauración, y en últimas es ocasionado por el esfuerzo vocal al que se vio expuesta la señora Piedrahita, desenlace al que se llegó observando los requisitos y procedimientos establecidos en el manual para emitirlo, ajustándose la calificación a los lineamientos y límites de este manual, a más de que también se ve reflejado en la apreciación del resumen de historia clínica a fin de demostrar que el quebranto de salud se fue dando con el desarrollo de su trabajo en el que pasaba la mayor parte del tiempo, haciendo uso excesivo de la voz, sin que la empresa tomara las medidas de manera oportuna, por lo que una vez reubicada el daño en la voz estaba dado. Reitera la Sala que es necesario darle total valor probatorio al experticio, porque se ajusta a la realidad de la accionante, a más, debe tenerse presente que fue rendido por una entidad habilitada por la ley, sin que considere trascendental esta sala que el médico que elaboró el dictamen, tenga especialización en el tema de la "VOZ", como refuta el recurrente, pues del estudio rendido se denota el cuidado y diligencia con que desarrolló el mismo.

Encuentra la Sala que en el caso sometido a estudio, los padecimientos calificados en el dictamen emitido por la Universidad CES, el cual quedó en firme, en el que se modifica el origen de la patología de la señora María Luz, acreditan la existencia de un vínculo determinante con la enfermedad profesional, por lo que dable es concluir que si bien la señora Piedrahita Grisales podía presentar una patología de base, como lo expresó el recurrente, dicho hecho no fue el aspecto concluyente en la merma de capacidad laboral, sino que fue el día a día, en su jornada laboral que llevaba a la actora a realizar un desgaste exhaustivo de la voz, en razón de su oficio en el cual debía hablar telefónicamente casi que las 8 horas diarias laborales, lo que llevó a que su enfermedad se fuera incrementando y llevando a que la misma tenga una connotación de "severa", y su pronóstico de recuperación incierto, razones esbozadas que nos llevan a insistir en el total valor probatorio al dictamen emitido por el CES, el cual, como se ha venido diciendo está soportado en criterios médicos razonables, lo que nos lleva consecuentemente a confirmar la decisión de primera instancia.

Costas de segunda instancia a cargo de la ARL Colmena S.A. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$908.526.

FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA INTEGRAMENTE** la sentencia revisada en apelación, de fecha y procedencia indicadas,

Costas de segunda instancia a cargo de la ARL Colmena S.A. Se fijan las agencias en derecho en \$908.526.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los Magistrados,



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 065 del 20 de abril de 2021.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>